

Departamento de Protección a Testigos de Costa Rica

Licda. Viria Murillo Murillo, Jefa de Unidad

Fiscalía – Jacó

13 de junio de 2025

AVISO DE DEMANDA (PROPORCIONADO EN ESPAÑOL E INGLÉS)

Enviado por correo certificado con acuse de recibo y por correo electrónico

Expediente n.º 24 000196 0645 PE

Asunto:

- 1.Solicitud urgente de emergencia y requerimiento de recuperación de US\$ 35 000 estafados y sustraídos de una cuenta del banco Wells Fargo (Florida, EE. UU.)
- 2.Denuncia formal—Terrorismo internacional, corrupción pública organizada, violaciones de derechos humanos, narco-terrorismo y amenazas de muerte reiteradas contra inversores estadounidenses en Costa Rica; corrupción judicial para asesinar y despojar propiedades inmobiliarias a inversores de EE. UU.

Estimada Licda. Murillo y Honorables Fiscales de Jacó:

En nombre de un grupo de inversores estadounidenses que, desde su llegada a Costa Rica, han sido sistemáticamente objeto de: funcionarios judiciales y fiscales corruptos; amenazas de violencia; conspiración para arresto ilegal y detención arbitraria; tortura psicológica; actividad narco-terrorista; y difamación pública, solicitamos con carácter urgente:

- 1.Apertura inmediata de una investigación penal imparcial contra todas las personas y dependencias aquí señaladas.
- 2.Medidas de protección efectivas para salvaguardar a ciudadanos de EE. UU. que realicen actividades comerciales en Jacó.
- 3.Resumen de las alegaciones
 - Terrorismo internacional, corrupción pública organizada y encubrimiento
 - Altos funcionarios judiciales y fiscales de Jacó y Puntarenas han conspirado durante años para robar, defraudar y apropiarse ilegalmente de bienes raíces y activos hoteleros de inversores extranjeros.
 - Obstrucción de la justicia, detención ilegal y conspiración para arresto falso
 - Nuestros clientes han sido arrestados falsamente, retenidos sin cargos, negados a asesoría legal y, en algunos casos, expulsados del país con acusaciones infundadas.
 - Tortura psicológica y violaciones de derechos humanos
 - Se ha utilizado intimidación, privación del sueño, amenazas de violencia y carencia de necesidades básicas para coaccionar “confesiones” y declaraciones falsas.
 - Narco-terrorismo y agresiones violentas
 - La evidencia indica colusión entre funcionarios corruptos y redes transnacionales de narcotráfico, facilitando grupos armados responsables de asesinatos locales, secuestros de menores y homicidios públicos en Jacó.

– Difamación y delitos de odio discriminatorios

- Declaraciones públicas de jueces y abogados, mediante comunicados de prensa y redes sociales, presentan a nuestros clientes como “criminales extranjeros”, incitando a la hostilidad local y agravando las amenazas contra su integridad.

4. Amenazas de muerte recientes

Nuestro cliente principal recibió tres correos electrónicos con amenazas de muerte (copias adjuntas):

– 23 de mayo de 2025 a las 3:15 a. m.

– 23 de mayo de 2025 a las 3:32 a. m.

– 25 de mayo de 2025 a las 11:17 a. m.

Cada mensaje nombra inversores estadounidenses específicos y advierte de una “ejecución pública” si continúan ejerciendo sus legítimos derechos comerciales y legales en Costa Rica.

5. Actores corruptos identificados

Nuestra prueba—registros bancarios, grabaciones de audio, declaraciones juradas y peritajes forenses—señala la participación activa de:

- Tres jueces en ejercicio en el Circuito Judicial de Puntarenas, el Juzgado de Jacó y la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
- Tres fiscales de la Oficina de Jacó.
- Varios abogados intermediarios en transacciones inmobiliarias fraudulentas, incluido CRISTIAN EDUARDO ZAMORA SEQUEIRA, destinatario de fondos sustraídos de la cuenta Wells Fargo (EE. UU.) y de una cuenta del Banco de Costa Rica.

Estos materiales constan en el expediente del Oficial de Registros Públicos del Departamento de Policía de Jacó, Donaldo Bermúdez Rodríguez; del Fiscal Eduardo Mora Cascante; del Abogado Yulian Masís Aguilar; de la Fiscal del Colegio de Abogados Viamney Guzmán Alvarado; del Presidente del Colegio de Abogados Francisco Eiter Cruz Marchena; y han sido compartidos con el Presidente de la República Rodrigo Chaves; Donald J. Trump; el Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio; el investigador Bob Nygård (FL-NY); el Director del FBI Kash Patel; la DEA e INTERPOL.

4. Impacto en la inversión estadounidense y el turismo

Estos ataques coordinados y crímenes de terrorismo internacional han:

– Forzado a múltiples inversores de EE. UU. a abandonar sus proyectos en Costa Rica.

– Costado a nuestros clientes millones en capital perdido y beneficios no realizados en negocios inmobiliarios y hoteleros en EE. UU. y Costa Rica.

– Socavado la confianza en el sistema judicial costarricense, disuadiendo a potenciales inversores y turistas.

5. Base legal para la acción inmediata

- Artículos 353–355 (Corrupción pública) y 207–209 (Amenazas, tortura) del Código Penal de Costa Rica.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 5, 8 y 13).
- Pactos internacionales de protección a inversores extranjeros (p. ej., Tratados Bilaterales de Inversión).

6.Solicitud de medidas

7.Devolución inmediata de los US\$ 35 000 sustraídos de la cuenta Wells Fargo de Florida (EE. UU.).

8.Apertura de investigación penal contra todos los jueces, fiscales y abogados mencionados por:

- Terrorismo internacional, corrupción pública organizada y conspiración.
- Obstrucción de la justicia, detención ilegal y conspiración para arresto falso.
- Tortura psicológica y violaciones de derechos humanos.
- Narco-terrorismo y agresiones violentas.
- Difamación y delitos de odio discriminatorios.
- Robo de fondos, extorsión, asociación ilícita, honorarios fraudulentos, intereses y penalizaciones.

9.Congelamiento de todos los activos y suspensión de procesos judiciales vigentes o futuros iniciados contra inversores de EE. UU. por los funcionarios implicados, hasta la conclusión de la investigación.

10.Coordinación con la Oficina de Cooperación en Defensa de la Embajada de EE. UU. y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar avances.

Archivos adjuntos de evidencia:

Exhibición A – Correo electrónico con amenaza de muerte, 23 de mayo de 2025 a las 3:15 a. m.

Exhibición B – Correo electrónico con amenaza de muerte, 23 de mayo de 2025 a las 3:32 a. m.

Exhibición C – Correo electrónico con amenaza de muerte, 25 de mayo de 2025 a las 11:17 a. m.

Exhibición D – Resumen de declaraciones de testigos y registros bancarios de Wells Fargo (EE. UU.)

Exhibición E – Comprobantes de pago del Banco de Costa Rica a la cuenta del Juzgado de Puntarenas

Exhibición F – Mensajes de texto, llamadas y fotos del alcalde Francisco José González Madrigal y del co-conspirador Alex Bonilla, que evidencian esquemas fraudulentos de ejecución hipotecaria y usurpación de propiedades, similares a los del exalcalde Tobias Murillo

Exhibición G – Tres quejas certificadas al Departamento de Impuesto Inmobiliario de la Municipalidad de Jacó y la negativa del alcalde González Madrigal a proporcionar estados de sanciones e intereses o a reunirse

Exhibición H – Correo del 19 de marzo de 2025 del Abogado Yulian Masís Aguilar auxiliando a Eduardo Mora Cascante en el plan de robo y asesinato de inversores estadounidenses, tras presentar quejas al Presidente Chaves, al Presidente Trump y al Secretario Rubio, lo cual resultó en prohibiciones de viaje de Seguridad Nacional de EE. UU. contra los funcionarios implicados

Exhibición I – Comunicación del 6 de junio de 2025 de Daniel Mora Lobo, Fiscalía General de la República, Unidad de Inspección Fiscal, San José, Expedientes 24-000196-0645-PE; 25-00017-0077-PE; 25-000012-0077-PE

Exhibición J – 35 000 dólares estadounidenses de la cuenta bancaria de Wells Fargo en Florida, Estados Unidos

Exhibición K – Evidencia fotográfica de la posesión, por parte del oficial de la OIJ Donaldo Bermúdez Rodríguez, de un cheque del banco Wells Fargo

Exhibición L – Fotografía de News Press de la abogada pública corrupta detenida MÓNICA GABRIELA SÁNCHEZ VALVERDE

Exhibición M – Fotografía de News Press del cadáver asesinado de narcotraficante JOSÉ ANTONIO CALDERÓN VARGAS, en poder de los registros públicos de los tribunales gubernamentales de Jacó

Presentación de Pruebas Incriminatorias y Solicitud Formal de Investigación Penal

Dirigido por el Presidente Rodrigo Chaves; asesorado por el Presidente Donald J. Trump y el Secretario de Estado de EE.

UU. Marco Rubio

1. Partes Implicadas

- a. Francisco Eiter Cruz Marchena, Presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica
- b. Eduardo Mora Cascante, Fiscal, Departamento de Policía de Jacó

2. Naturaleza de las Alegaciones

- a. Terrorismo Internacional
- b. Corrupción Pública Organizada
- c. Obstrucción de la Justicia
- d. Graves Violaciones de Derechos Humanos
- e. Conspiración de Narco-Terrorismo para Asesinar a Inversores Estadounidenses
- f. Manipulación de Registros Judiciales y Pruebas Gubernamentales

3. Pruebas en Posesión

- a. Expedientes judiciales originales y registros públicos que demuestran la conspiración y el encubrimiento
- b. Fotografía de prensa del abogado asesinado José Antonio Calderón Vargas
- c. Evidencia fotográfica y documental de un cheque Wells Fargo de US\$ 35 000 sustraído

4. Victimación Adicional por parte de la Abogada Yorleni Díaz

– El fallecido José Antonio Calderón Vargas y su hermano fueron defraudados por la Sra. Díaz, quien se apropió indebidamente de fondos de inversión inmobiliaria y provocó la disolución de su matrimonio.

5. Solicitud de Medidas

- a. Que el Colegio de Abogados inicie procedimientos disciplinarios y penales contra:
 - Francisco Eiter Cruz Marchena
 - Yorleni Díaz; Juan Calderón Díaz; Junior Díaz (ejercicio ilegal de la abogacía)
 - Andrea Díaz (abogada de inmigración)
 - Graig Anthony Atherton (gerente)
- b. Que el Departamento de Policía de Jacó, bajo la dirección del Fiscal Mora Cascante, convoque una investigación de gran jurado contra todos los funcionarios nombrados por obstrucción de la justicia, violaciones de derechos humanos y narco-terrorismo
- c. Suspensión inmediata de todas las licencias profesionales de las partes implicadas, en tanto se realice una investigación completa y transparente

Denuncias Penales y Alegaciones de Terrorismo Internacional, Corrupción Pública Organizada, Narcotráfico y Conspiración para Asesinar

1.Introducción

Inversores estadounidenses (los “Inversores”) han presentado denuncias penales paralelas: una que alega Terrorismo Internacional y Corrupción Pública Organizada; la otra, Narcotráfico. Estas denuncias solicitan que el Presidente Trump, el Secretario Rubio, la Sección de Investigación de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado de EE. UU., el gobernador de Florida Ron DeSantis, la Embajada de EE. UU., la directora de Seguridad Nacional Kristi Noem, el FBI, la DEA y la INTERPOL desplieguen equipos de investigación en Costa Rica para exponer y procesar:

- a. Funcionarios públicos y judiciales corruptos que han auxiliado redes narco-terroristas
- b. Abogados que colaboran en el encubrimiento de corrupción pública organizada y narcotráfico
- c. Conspiradores que planearon asesinar a inversores estadounidenses en represalia por la legítima propiedad de bienes raíces, hoteles y residencias en Costa Rica

2.Alegaciones Fácticas

a. Arma sistemática del Poder Judicial

- Jueces y funcionarios judiciales de alto rango ignoraron reiteradamente derechos procesales, protegiendo a narcotraficantes y financistas del terrorismo de toda responsabilidad.
- Este sistema “armado” ha facilitado asesinatos públicos —incluidos de menores— y defraudado a inversores estadounidenses de sus derechos de propiedad.

b. Conspiración para Asesinar

- Plan coordinado entre funcionarios públicos y abogados para eliminar a inversores estadounidenses que cuestionaban esquemas corruptos de apropiación de tierras.
- Uso de amenazas de muerte, arrestos retaliatorios, cargos penales falsos, demandas fraudulentas, fraudes de ejecución hipotecaria, tasas y gravámenes falsos en el registro nacional y expedientes judiciales.

c. Perjuicios Económicos y Personales

- Pérdidas financieras catastróficas: imposibilidad de costear tratamientos médicos; impuestos inmobiliarios impagados con multas acumuladas; facturas veterinarias impagadas por crueldad animal de funcionarios implicados.
- Sabotaje público y destrucción de proyectos hoteleros y otros negocios mediante procesos penales falsos, difamación y gravámenes de fraude inmobiliario.

3.Patrón y Práctica: Modo Operandi

- a. Tácticas que replican acciones con motivación política contra el Presidente Trump (procesos penales federales).
- b. Denuncias contra el Presidente Rodrigo Chaves en Diario Extra: “El enemigo de C.R. está en las curules y despachos judiciales.”
- c. Esquemas similares de detención ilegal y conspiración para asesinar en el condado de Lee, Florida, que involucran al Sheriff Carmine Marceno y a los ayudantes Brian Hoyt y Larry Wincelozicz —actualmente bajo investigación federal del FBI con 14 cargos—.

4. Difamación, Delitos de Odio y Lavado de Dinero

- El Sheriff Carmine Marceno difundió fotografías de arrestos falsificadas, difamando a los Inversores y saboteando sus oportunidades de negocio en EE. UU. y Costa Rica.
- Estos actos constituyen delitos públicos de odio continuados y requieren acción inmediata de las autoridades de EE. UU.

5. Solicitud de Medidas

- a. Que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la Sección de Investigación de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado de EE. UU., el Secretario Rubio, el FBI, la DEA y la INTERPOL inicien una investigación penal conjunta en Costa Rica contra todos los funcionarios y abogados nombrados.
- b. Que las autoridades competentes en materia de seguridad presenten cargos por terrorismo internacional, corrupción pública organizada, narcotráfico, conspiración para cometer asesinato y difamación.
- c. Que se inicien procedimientos civiles de decomiso de activos contra todos los funcionarios corruptos y sus ganancias ilícitas.
- d. Que se concedan medidas cautelares injuntivas para proteger los intereses patrimoniales y la seguridad personal de los Inversores mientras se tramitan los procesos penales.
- e. Que se otorgue cualquier otra medida que el tribunal considere justa y adecuada para resarcir los daños sustanciales sufridos por los Inversores.

I. ANTECEDENTES

1. A finales de junio de 2024, Costa Rica se vio sacudida por un monumental escándalo de corrupción: veinte (20) servidores públicos —jueces, abogados, agentes de la Policía de Tránsito y personal administrativo— fueron arrestados en cuatro operaciones separadas. En paralelo, treinta y seis (36) personas fueron detenidas en el caso de fraude inmobiliario “Madre Patria”, un esquema para despojar de propiedades a inversores extranjeros.
2. Lamentablemente, el mismo modus operandi ahora se extiende a las oficinas del Departamento de Impuestos sobre Bienes Raíces del Municipio de Jacó y a la Fiscalía de Jacó. (Véase <https://www.telediario.cr/en-alerta/caso-madre-patria-36-personas-detenidas-fraude>.)

II. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Hacia finales de 2024, bajo la dirección de la abogada pública corrupta Yorleni Díaz, un amateur gestionó que un cheque bancario de Wells Fargo de los Estados Unidos por US\$35,000 se depositara en una cuenta costarricense. Esos fondos nunca fueron acreditados como se prometió y, pese a múltiples consultas y denuncias penales registradas en los archivos públicos de la Policía de Jacó (a la vista de todos), no han sido devueltos.
2. Desde entonces, nuestros clientes han sufrido reiteradas amenazas de muerte, hostigamiento y conspiración para asesinar, derivadas de este esquema de Corrupción Pública Organizada de Terrorismo Internacional. Han denunciado estos delitos en al menos siete ocasiones ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) —específicamente ante los oficiales de policía corruptos Michael Soto Rojas y Donaldo Bermúdez Rodríguez, y los fiscales públicos corruptos Norma Cayaso y Eduardo Mora Casconte, entre otros—. Cada denuncia fue recibida con indiferencia, burlas o rechazo a investigar, y con manipulaciones en los registros del Poder Judicial de Costa Rica.

3.El 2 de marzo de 2025, los Inversionistas presentaron una denuncia penal detallada de 13 páginas ante INTERPOL, adjuntando voluminosos documentos públicos del Gobierno de Costa Rica. El 3 de marzo de 2025, presentaron una denuncia de 11 páginas al Federal Bureau of Investigation (FBI), registrada por el Director Kash Patel. Copias de ambas denuncias criminales —de Corrupción Pública Organizada de Terrorismo Internacional y de Narcoterrorismo— están a disposición de su oficina previa solicitud.

4.En tres ocasiones distintas, mediante correo certificado con acuse de recibo, solicité al alcalde Francisco José González Madrigal:

- a. Un desglose completo y pormenorizado de todas las valorizaciones, multas e intereses de los impuestos sobre bienes raíces de mis propiedades en Costa Rica a mayo de 2025; y
- b. Una cita presencial para revisar dichos registros.

Hasta la fecha, el alcalde González Madrigal ha evitado deliberadamente todo contacto y se ha negado a entregar cualquier documentación.

5.Documentos de acceso público en poder de la Fiscalía de Jacó establecen que funcionarios municipales corruptos —actuando en concierto con la oficina de la abogada pública corrupta y ladrona Yorleni Díaz y con el socio de “ZAR Abogados” Cristian Eduardo Zamora Sequeira— han:

- Cobrado honorarios de abogado fraudulentos, honorarios por conflicto de interés, tasación, honorarios de honorarios y costas judiciales;
- Falsamente representado su estatus y autoridad;
- Conspirado para despojar de sus bienes raíces a inversores de Estados Unidos; y
- Cometido obstrucción a la justicia, violaciones de derechos humanos, extorsión (racketeering), difamación, delitos de odio discriminatorios y narcoterrorismo.

6.Seis (6) casos adicionales de fraude “numerados por expediente” siguen pendientes en los archivos públicos de su oficina, todos dirigidos contra inversores estadounidenses. Estas conspiraciones de Corrupción Pública Organizada de Terrorismo Internacional y Narcoterrorismo ya han causado detenciones falsas, amenazas de muerte y asesinatos reales de turistas y propietarios extranjeros —incluyendo el asesinato y masacre de niños en público—.

III. ALEGACIONES

- Fraude y robo: apropiación indebida de US\$35,000 de una cuenta en Wells Fargo Bank de Estados Unidos.
- Conspiración: coordinación entre abogados privados, funcionarios judiciales y fuerzas del orden para facilitar detenciones falsas y daños físicos a los Inversionistas.
- Auxilio y complicidad en Narcoterrorismo: colaboración con organizaciones de tráfico de drogas y amenazas de violencia.
- Corrupción Pública Organizada: abuso del poder fiscal para encubrir conductas delictivas y obstruir la justicia.
- Difamación y delitos de odio: campañas continuas de calumnias y ataques discriminatorios contra ciudadanos estadounidenses.
- Manipulación de pruebas e intimidación de testigos.

IV. BASES LEGALES

- Conforme al derecho costarricense, el fraude y el abuso de la función pública son delitos penales castigados con pena de prisión.
- Conforme al derecho de EE. UU., el auxilio y complicidad en narcoterrorismo (18 U.S.C. §§ 2332d, 1956), la corrupción organizada internacional (18 U.S.C. § 1962) y el secuestro o conspiración para cometer actos violentos (18 U.S.C. § 1201)

conlleven severas penas federales, incluida la cadena perpetua y la confiscación de bienes.

- La Ley N.º 10175 (Costa Rica) castiga los delitos de odio con penas de prisión de 20 a 35 años.

V. PETICIÓN DE RESARCIMIENTO

En virtud de la legislación costarricense aplicable y de los tratados internacionales de protección de inversiones, en un plazo de cinco (5) días naturales contados desde la recepción de este Aviso, deberá:

A. Devolución de fondos apropiados

1. Disponer la inmediata devolución de US\$35,000 a la cuenta de Wells Fargo en EE. UU. de los Inversionistas (datos a proporcionar a solicitud).

2. Iniciar una investigación independiente y expedita sobre todos los involucrados, incluidos:

- La abogada pública corrupta Yorleni Díaz
- El co-conspirador y delincuente Juan Calderón Díaz
- El abogado público corrupto Cristian Eduardo Zamora Sequeira
- El abogado público corrupto José Juan Sánchez Chavarría
- El abogado público corrupto Karl Villalobos Hoffmann
- La abogada arrestada Mónica Sanchaz Valverde
- El Colegio de Abogados Público Corrupto Viamney Guzmán Alvarado
- El Presidente del Colegio de Abogados Público Corrupto Francisco Eiter Cruz Marchena
- El abogado público corrupto Luis Antonio Cubillo Pacheco
- Cualquier funcionario público judicial corrupto y cómplice en este esquema.

3. Conservar y entregar toda documentación, comunicaciones y grabaciones relacionadas con estos asuntos.

4. Cesar de inmediato cualquier acoso, amenazas o manifestaciones difamatorias contra los Inversionistas.

B. Contabilidad y alivio tributario

5. Proporcionar un desglose completo y pormenorizado de todos los impuestos sobre bienes raíces, multas e intereses aplicados a mis propiedades a mayo de 2025.

6. Entregar copias completas de todas las comunicaciones, resoluciones, informes internos y registros públicos relacionados con los seis (6) expedientes de fraude en su poder.

7. Presentar un cronograma preciso —con fecha límite determinada— para la devolución o condonación de todos los impuestos, multas, honorarios y cargos recaudados ilegalmente.

8. Identificar a cada funcionario público, empleado municipal, fiscal y abogado privado involucrado en las conspiraciones mencionadas.

VI. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento total de estas exigencias en el plazo señalado dará lugar a:

- Procesos penales en Costa Rica y cargos adicionales en tribunales federales de EE. UU.;
- Coordinación con el Departamento de Estado de EE. UU., el Departamento de Justicia de EE. UU., la Embajada de EE. UU. en Costa Rica, el FBI, la DEA, INTERPOL y otros organismos internacionales para obtener órdenes de arresto, extradición y congelamiento de activos;
- Recursos civiles en tribunales de EE. UU. por lavado de dinero, interferencia tortuosa, imposición intencional de sufrimiento emocional, difamación y extorsión (racketeering);

- Publicación de su conducta como amenaza a la seguridad nacional, lo cual activará sanciones y vetos de viaje conforme a la legislación federal de EE. UU.

VII. RESERVA DE DERECHOS

Este Aviso no agota la totalidad de los hechos ni las teorías legales. Los Inversionistas reservan expresamente todos los derechos y recursos bajo las leyes de Costa Rica y de EE. UU.

De no atenderse plenamente estos requerimientos en el plazo de cinco (5) días, los Inversionistas estadounidenses iniciarán de inmediato:

- a. Recursos administrativos ante la Contraloría General de la República;
- b. Procedimientos civiles en los tribunales costarricenses por enriquecimiento ilícito, fraude, extorsión (racketeering), enjuiciamiento malicioso, difamación, discriminación, violaciones de derechos humanos y agravios conexos;
- c. Arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversiones EE. UU.–Costa Rica y el Convenio del CIADI; y
- d. Denuncias al Departamento de Estado de EE. UU. y al FBI por extorsión, Corrupción Pública Organizada de Terrorismo Internacional y narcoterrorismo.

Los Inversionistas de EE. UU. buscarán medidas cautelares, daños punitivos, restitución, intereses pre y post sentencia, honorarios de abogados y todo otro resarcimiento amparado por la ley costarricense e internacional.

VIII. CONCLUSIÓN

La economía y el turismo de Costa Rica dependen de una administración de justicia transparente y libre de corrupción. Su pronta atención a esta exigencia es el primer paso para restaurar la confianza.

Dios bendiga a los Estados Unidos, y Dios bendiga a Costa Rica.

Atentamente,

Enzo Vincenzi

Inversionistas de Estados Unidos

Ocean Beach Jaco Hotel

Residencial Jaco Sol (detrás de Plaza Coral)

oceanbeachjaco@gmail.com

Copia para:

- Contraloría General de la República
- Ministerio de Justicia (Hon. Mario Zamora Cordero)
- Secretario de Estado de EE. UU. (Sen. Marco Rubio)
- Embajada de EE. UU. en Costa Rica (Emb. Melinda Hildebrand)
- Departamento de Estado de EE. UU., Departamento de Investigación de Asuntos Exteriores
- Departamento de Justicia de EE. UU. (Dir. Pamela Bondi)
- Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (Dir. Kristi Noem)
- Federal Bureau of Investigation
- Drug Enforcement Administration de EE. UU.

- Central Intelligence Agency (Dir. John Radcliff)
- Cuartel General de la Policía de INTERPOL
- Embajada de EE. UU. (Washington, D.C.)
- Despacho de la Presidencia de Costa Rica (Rodrigo Chaves)
- Presidente de los Estados Unidos de América (Donald J. Trump)